

REPÚBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN Medellín, cinco (05) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

La Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, integrada por los Magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES (ponente), MARIA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ y NANCY GUTIÉRREZ SALAZAR, cumplido el traslado de que trata el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, se procede a dictar la sentencia que corresponde en este proceso ordinario de doble instancia instaurado por SIRLEY BANESA ARROYAVE RAIGOZA contra COLPENSIONES (Radicado 05001-31-05-015-2020-00369-01).

Se reconoce personería para continuar con la representación judicial de Colpensiones al abogado SEBASTIÁN ORREGO BETANCURT con C.C 1.128.394.745 y T.P 278.334 del C.S de la J. conforme a la sustitución allegada.

ANTECEDENTES

Pretende la demandante de Colpensiones el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes temporal causada por el fallecimiento de su cónyuge Edwin Herrera Parra a partir del 28 de abril de 2018 cuando acaeció la muerte, y las costas del proceso.

Al efecto, se narró que contrajo matrimonio con Edwin Herrera Parra el 15 de enero de 2015, momento para el que ya era madre de una menor que su pareja acogió desde que tenía 5 años de edad. El señor Herrera falleció el 28 de abril de 2018, fecha para la que se encontraba conviviendo de manera permanente con su hija de crianza y cónyuge, última que contaba con menos de 30 años

de edad. El 31 de agosto de 2020 envió petición solicitando el reconocimiento de la prestación de manera temporal, recibiendo respuesta desfavorable.

COLPENSIONES pese a ser notificada en debida forma por parte del Juzgado el 04 de marzo de 2021 (Archivo 08) y verificarse la satisfacción del requisito que en ese momento disponía el artículo 6° del Decreto 806 de 2020 referido al envío simultáneo del escrito de demanda por parte del promotor de la litis a quien se llamaba a juicio (Archivo 03), lo que da cuenta del conocimiento de la entidad sobre el proceso promovido en su contra, se abstuvo de emitir pronunciamiento sobre las pretensiones y fundamentos de hecho, motivos que conllevaron a que la operadora judicial por auto del 03 de noviembre de 2021 diera por no contestada la demanda (Archivo 18).

En el marco de escenario el 19 de noviembre de 2021 el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Medellín profirió sentencia en la que DECLARÓ que la demandante no cumplía con los requisitos para ser beneficiaria de la pensión de sobrevivientes solicitada. ABSOLVIÓ a Colpensiones de las pretensiones de la demandada e impuso costas a cargo de la demandante, fijando las agencias en derecho en la suma de \$908.526.

La Sala en virtud de lo que regula el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, ante la ausencia de recursos interpuestos por la parte vencida, conoce del asunto por el grado de consulta en favor de la demandante cuya decisión le fue totalmente desfavorable.

En el término pertinente, las partes presentaron sus alegaciones de segunda instancia, con argumentos semejantes a los expuestos en las etapas procesales transcurridas en primer grado.

CONSIDERACIONES

No es tema de discusión al interior del plenario que el señor Edwin Herrera Parra falleció por causas de origen común el 28 de abril de 2018 (Pág. 30 Archivo 01), y que el 15 de enero de 2015 había contraído matrimonio con Sirley Banesa Arroyave Raigoza (Pág. 28 Archivo 01) dejando causado el

derecho a la pensión de sobrevivientes en razón de haber cotizado más de 50 semanas en los tres años anteriores a su deceso (Págs. 17-23 Archivo 01), por lo que el tema central se circunscribe a determinar si la solicitante acredita en debida forma el requisito de convivencia, necesario para ser beneficiaria en su calidad de cónyuge de la pensión de sobrevivientes con causa del deceso del afiliado Herrera Parra.

Pues bien, para resolver el asunto se tiene que la normatividad aplicable acorde a la teoría del hecho causante es la vigente al momento en que acaeció la contingencia asegurada, por lo que al haber ocurrido el deceso del afiliado el 28 de abril de 2018, debe aplicarse lo que dispone el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003 para definir el derecho a la pensión de sobrevivientes deprecada, que señala los beneficiarios de la prestación, indicando textualmente lo siguiente de cara al tema:

“a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera permanente o supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte;

b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga menos de 30 años de edad, y no haya procreado hijos con este. La pensión temporal se pagará mientras el beneficiario viva y tendrá una duración máxima de 20 años. En este caso, el beneficiario deberá cotizar al sistema para obtener su propia pensión, con cargo a dicha pensión. Si tiene hijos con el causante aplicará el literal a).

... d) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho, serán beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente de este.”

Así, para la cónyuge o compañera permanente que pretenda ser beneficiaria de una pensión de sobrevivientes debe demostrar de manera cierta y convincente la convivencia por un espacio de 5 años con el causante entendida esta como la “*comunidad de vida, forjada en el crisol del amor responsable, la*

ayuda mutua, el afecto entrañable, el apoyo económico, la asistencia solidaria y el acompañamiento espiritual, que refleje el propósito de realizar un proyecto de vida de pareja responsable y estable, a la par de una convivencia real efectiva y afectiva- durante los años anteriores al fallecimiento del afiliado o del pensionado” (Ver SL3813-2020 y SL5540-2021 que traen a colación la SL1399-2018).

Es verdad que el máximo órgano de cierre desde la providencia SL1730-2020 a consecuencia de la nueva integración de la Sala de Casación Laboral reevaluó la posición sobre la exégesis del artículo 47 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, en cuanto al número de años de convivencia exigidos a la compañera permanente de un afiliado al Sistema General de Pensiones, sentando como nueva doctrina de interpretación que el tiempo de convivencia mínima de cinco (5) años, solo es exigible en caso de muerte del pensionado; en tanto consideró que con la simple acreditación de la aludida condición y la conformación del núcleo familiar con vocación de permanencia, vigente para el momento de la muerte, se cumple el supuesto previsto en la disposición reguladora de la prestación

Lo anterior, a la luz de la finalidad y legitimidad de los requisitos que contiene la normativa, en coherencia con los argumentos sentados en la exposición de motivos del proyecto de ley, y el análisis de constitucionalidad desplegado de la sentencia C-1094-2003 donde se equiparó el requisito de convivencia mínima, en el caso de afiliado y pensionado, definiendo que del precepto legal se advierte con suma claridad y contundencia que la exigencia de un tiempo mínimo de convivencia de 5 años allí contenida, se encuentra relacionada únicamente al caso en que la pensión de sobrevivientes se causa por muerte del pensionado, a fin de evitar conductas fraudulentas, y “*convivencias de última hora con quien está a punto de fallecer y así acceder a la pensión de sobrevivientes*”, por la muerte de quien venía disfrutando de una pensión, finalidad que se tuvo por legítima por la Alta Corporación además de acompañada con la protección del núcleo familiar del asegurado que fallece, ya sea constituido por vínculos naturales o jurídicos que es el propósito primigenio de esta prestación; siendo esta la postura que a la fecha rige e

impera en la Corporación, siendo reiterada entre otras providencias en las SL1905-2021, SL2222-2021, SL5270-2021 y SL3581-2022.

Aun con ello, no es dable desconocer por parte de esta colegiatura que la Corte Constitucional por medio de la Sentencia de Unificación 149 de 2021, se opuso a tal criterio, partiendo del recuento jurisprudencial de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia de donde se ha evidenciado que la interpretación pacífica y reiterada ha estado encaminada a exigir el requisito de convivencia a beneficiarios de pensionados y afiliados, sin distinción y, por lo menos, durante los cinco años continuos antes de este suceso, exégesis que fue estable desde 2008 y hasta marzo de 2020 sin variación tanto en los casos en los que casó providencias en las que los Tribunales se apartaban de esta regla, como aquellos en los que no casó sentencias donde se negó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes para beneficiarios de afiliados que no demostraban este requisito, siendo las razones esbozadas para exigir el requisito de convivencia en primer lugar, que la simple condición de pensionado no es una razón para establecer una diferencia entre los beneficiarios que integran el grupo familiar de este y del afiliado. En segundo lugar, se atribuye a esa convivencia un elemento indispensable para considerar que el cónyuge o compañero(a) permanente hace parte del grupo familiar del pensionado y afiliado, establecidos por el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 como únicos beneficiarios de la pensión de sobrevivientes. Y en tercer lugar, la Ley 797 de 2003 sólo modificó el tiempo exigido de convivencia con el pensionado o afiliado, mas no alteró el concepto de beneficiario de la pensión de sobrevivientes.

De ese modo, el Tribunal Constitucional definió que la decisión ahora adoptada por la Corporación es contraria a los postulados constitucionales, conduce a resultados desproporcionados y no armoniza con los propósitos de la pensión de sobrevivientes ni con los del requisito de convivencia, además de violar directamente los principios de igualdad y sostenibilidad financiera del sistema pensional sin justificación objetiva; el primero, en tanto la legislación contempla, por igual, al grupo familiar del pensionado y del afiliado fallecidos como beneficiarios de la pensión de sobrevivientes y cualquier distinción entre sujetos que acceden a la misma posición jurídica, en este caso la sustitución

pensional o la pensión de sobrevivientes, según el caso, debe responder a una razón verificable y que suponga la atención de derechos, bienes o valores constitucionales significativos so pena de estarse ante una distinción arbitraria; y el segundo, porque la decisión cuestionada genera *per se* un costo fiscal muy alto a los recursos del Sistema, permitiendo que un importante número de personas que no haciendo parte del núcleo familiar del occiso, accedan al reconocimiento prestacional de carácter vitalicio, solo por acreditar periodos pequeños y nimios de convivencia, por demás accidentales y transitorios.

De allí que sea esta última orientación de unificación a partir de la cual se conserva la interpretación que en efecto se había venido aplicando donde la convivencia ha sido el hito que da paso al disfrute de esta prestación, la que esta Sala acoge, cuya fuerza vinculante redundando en una mayor coherencia del sistema jurídico colombiano, lo cual no se contradice con imperativos de adaptación a los cambios sociales y económicos, y garantiza de mejor manera la vigencia del derecho a la igualdad ante la ley de los ciudadanos, por cuanto casos semejantes son fallados de igual manera, así como la sumisión de los jueces ordinarios a los precedentes sentados por las Altas Cortes asegura una mayor seguridad jurídica para el tráfico jurídico entre los particulares.

A partir de lo anterior, y siendo indiscutido que en este asunto la pareja Herrera Arroyave tuvo una convivencia bajo las características que ilustra la ya mencionada providencia SL1399-2018, entre el 15 de enero de 2015 cuando celebraron nupcias y el 28 de abril de 2018 cuando el acaeció el deceso pues así se desprende desde el escrito de demanda y fue de esa manera declarado ante la Notaria única de Entrerrios el 18 de agosto de 2020 por la petente (Pág. 25 Archivo 01), patente resulta la insatisfacción de los tiempos que el legislador en el marco de la interpretación de la Corte Constitucional exige para efectos de demostrar la calidad de beneficiaria de la pensión de sobrevivientes de cara a la muerte de su cónyuge quien fungía como afiliado del sistema, que no redundando en uno distinto al de cinco años, en tanto lo probado da cuenta de una convivencia surgida por poco más de tres años, lo que no asigna ni de manera temporal en cabeza de la demandante la prestación, sin que se presenten otras circunstancias que releven la probanza de ese elemento.

Bastan las anteriores consideraciones para considerar acertada la decisión absolutoria revisada en consulta y por tanto, la misma habrá de ser confirmada.


En esta instancia, atendiendo el grado de consulta no se causaron costas.

DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala cuarta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **CONFIRMA** la sentencia venida en consulta de fecha y procedencia conocidas. Sin costas.

Notifíquese la presente decisión por EDICTO (num.3°, lit. d., art. 41 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social en concordancia con el auto 550-2021 CSJ).

Los Magistrados,



CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES



MARIA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ



NANCY GUTIERREZ SALAZAR

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
SALA LABORAL**



**SECRETARÍA
EDICTO**

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

HACE SABER:

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

Radicación:	05001310501520200036901
Proceso:	Ordinario
Demandante:	SIRLEY BANESA ARROYAVE RAIGOZA
Demandados:	COLPENSIONES
M. P.	CARLOS ALBERTO LEBRUN MORALES
Fecha de fallo:	05/12/2022
Decisión:	CONFIRMA

El presente edicto se fija por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibidem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy 6/12/2022 desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS

Secretario